

# Órdenes judiciales que abren archivos eclesiásticos

JUAN GIRÁLDEZ JIMÉNEZ

Estos días son de gran revuelo en el Estado Vaticano y entre los cristianos seguidores de la ortodoxia católica: todos esperando que el papa renunciante convoque el nuevo cónclave elector del futuro regente de la Iglesia y del Estado que va asociado a la misma, o al contrario.

Hoy, cuando me pongo a redactar estas líneas, un diario español señala que Benedicto XVI, el todavía papa, acaba de destituir de sus funciones al cardenal primado de Escocia, Keith O'Brien, después de que trascendiera que tres sacerdotes y un ex sacerdote le han acusado de acoso sexual en los años 80. Todo ha sido presentado como una renuncia del cardenal, aunque el diario sugiere que es una destitución en toda regla. El cese significa que O'Brien no asistirá al cónclave que debe elegir al nuevo papa tras la dimisión de Benedicto —aunque varios días después dice que asistirá a Roma a las reuniones previas—. Las acusaciones contra el cardenal se unen a las que pesan sobre otros miembros del cónclave, que amenaza con verse empañado con uno de los asuntos considerados clave en la decisión de Benedicto XVI de renunciar al papado: las dificultades para luchar contra los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

En el número 76 de *Archivamos* ya abordamos este escabroso tema, aunque centrándonos en el caso de Irlanda

y en el de abusos a menores, donde ya no solo se cometen actos *inmorales*, por decirlo de una manera suave y con un vocabulario muy afín a los eclesiásticos, sino que entramos en el ámbito del delito. Allí analizábamos el caso de la Diócesis de Cloyne, entre otras, donde la inadecuada respuesta del obispo John Ma-

a los abusos de menores sin que los obispos hicieran nada, excepto cambiar a los curas de parroquia, reiniciando sus prácticas una y otra vez. Esta juez era Yvonne Murphy, que redactó un informe en el que denunciaba abusos sexuales encubiertos por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades eclesiásticas.



gee a los conocidos casos de abuso, supusieron su abandono del cargo. Hubo más casos en Irlanda —como el del obispo de Limerick, Donald Brendan Murray—, pero lo más importante de todo es que *fue una juez la que permitió que saliera a la luz la existencia de archivos diocesanos que contenían la documentación relativa*

*Es la Justicia, en la persona de determinados jueces, la que está permitiendo que la documentación sobre estos delitos salga a la luz.* Es la institución católica, depositaria de una fe basada en la defensa del indefenso, la que ha protegido a los agresores y mantenido a las víctimas en una situación de indefensión, al menos eso es

lo que se puede colegir del caso explícito de Irlanda, por aludir al que tenemos bien documentado. Quizás Benedicto XVI pasará a la historia por ser el pontífice que se ha atrevido

informado el portavoz de la Archidiócesis de Nueva York, Joseph Zwilling, Dolan cooperó durante su declaración jurada y tuvo la oportunidad de hablar sobre su decisión de

quía en parroquia y evitando que acudieran a terapia para que los psiquiatras no pudieran alertar a las autoridades.

El líder actual de la iglesia de Milwaukee, el arzobispo Jerome Listekki, se acogió en el año 2011 a la protección por bancarrota alegando que era la única manera de poder pagar la compensación legal que se había establecido para las víctimas. Milwaukee es la octava diócesis de EE.UU. que inicia este procedimiento desde que en 2002 explotara el escándalo de los abusos sexuales en Boston escondidos durante décadas.

Según un reciente informe de Naciones Unidas, EE.UU. está fracasando en la persecución y condena del clero que abusó sexualmente de menores. El Comité de la ONU para los Derechos de la Infancia reclamó a finales de enero a EE.UU. tomar "las medidas necesarias para investigar todos los casos de abusos sexuales a niños ya hubieran sido cometidos de manera individual o de forma masiva por sacerdotes y durante un largo periodo de tiempo".

El caso de José I. Ugarte, sacerdote español que abusó de niños en EE. UU., figura entre los documentos que la Archidiócesis de Los Ángeles ha publicado, y en el que aparecen los nombres de más de 100 curas que abusaron sexualmente de menores de edad en su Iglesia local durante la década de 1980. El archivo personal de José Ugarte contiene una carta con fecha de 1993 y enviada a la archidiócesis por un hombre cuyo nombre fue eliminado, en la que se afirma que Ugarte comenzó a abusar sexualmente de él en 1983, cuando la víctima tenía 17 años. Según los documentos, el entonces arzobispo de la archidiócesis, Roger Mahony, y Ugarte llegaron a un acuerdo para que el cura español abandonara el país y

a investigar este tema de los abusos a menores, que ya algunos dicen que es el que le ha llevado a su renuncia. Pero le falta mucho a la Iglesia para abordar este tema de forma clara y transparente, según muchas voces.

Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, ha declarado a mediados de febrero dentro de una investigación de abusos sexuales a menores atribuidos a sacerdotes católicos en la Archidiócesis de Milwaukee (Wisconsin). Dolan, 62 años, se encuentra entre el grupo de cardenales estadounidenses que serán citados a declarar ante los abogados en Nueva York por casos de abusos sexuales. Pero su nombre figura estos días también en otra lista: la de papables. Dolan y el cardenal de Boston, Sean O'Malley, viajarán en los próximos días a Roma para participar en el cónclave. Según ha

hace nueve años de publicar los nombres de los sacerdotes que habían abusado de menores.

Tras Dolan debe comparecer Roger Mahony, el antiguo arzobispo de Los Ángeles, que deberá declarar sobre los abusos que se cometieron en su archidiócesis durante los más de 25 años en los que estuvo al frente. El pasado enero, *una orden judicial obligaba a divulgar más de 12.000 páginas de documentos internos de la Iglesia católica* que muestran la responsabilidad de Mahony en la protección dada por la Iglesia de Roma a los sacerdotes acusados. Tras la publicación de los archivos eclesiásticos en enero, el actual arzobispo de la Archidiócesis de Los Ángeles, José Gómez, despojó a Mahony de toda su actividad pública tras quedar probado que el cardenal encubrió a los curas que abusaron de menores trasladándolos de parro-



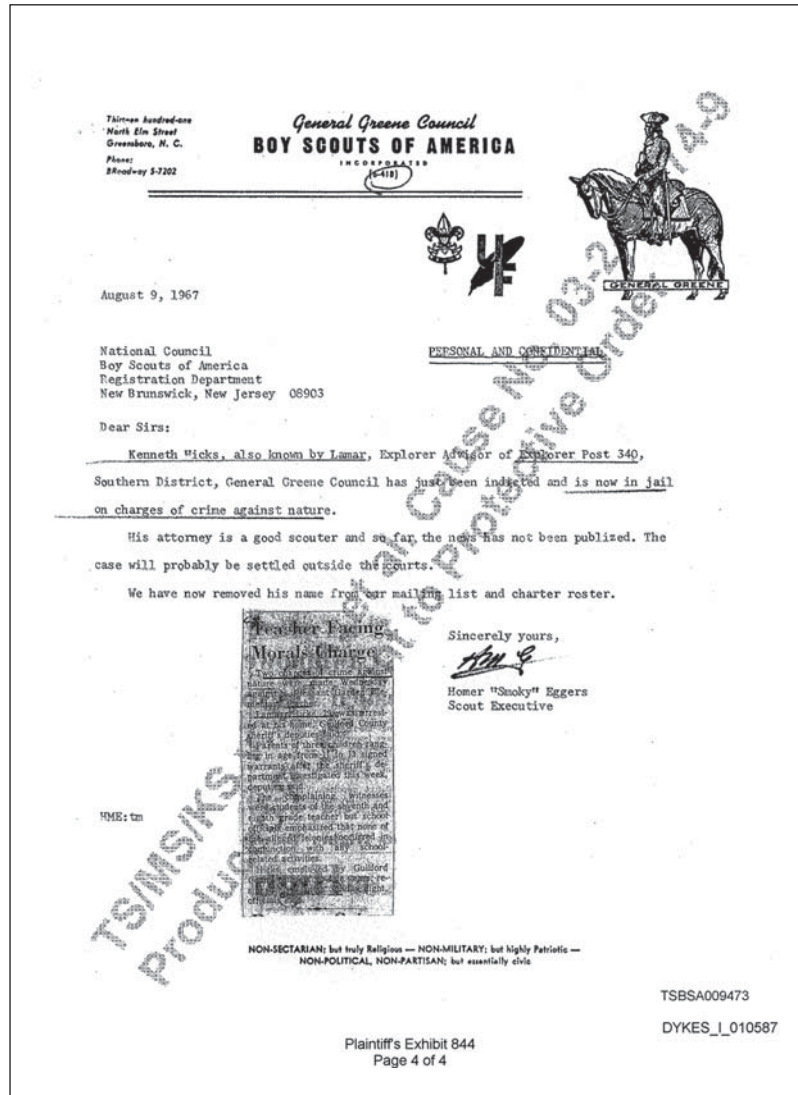
residiera de forma permanente en España.

El material recopilado está seleccionado de entre 12.000 páginas de comunicaciones internas, informes psiquiátricos y correspondencia con el Vaticano acerca de los 122 curas de la diócesis acusados de abusos sexuales (<http://clergyfiles.la-archdiocese.org/listing.html>). Los documentos, que se han hecho públicos dentro del acuerdo al que la Iglesia llegó en 2007 con más de 500 víctimas por 660 millones de dólares y que requería que la Archidiócesis de Los Ángeles entregara sus archivos personales que contenían el nombre de cada acusado de cometer abusos desde 1940, son la prueba final para las víctimas de que las más altas jerarquías intentaron tapar el escándalo incluso después de que la crisis estallara en 2002.

El arzobispo José Gómez, al frente de la archidiócesis tras el retiro del cardenal Mahony hace dos años, anunció la medida, dos semanas después de que una juez del Supremo de California ordenase hacer públicas tras una larga batalla legal de más de cinco años las más de 12.000 páginas de expedientes que afectan a más de 100 sacerdotes acusados de abusos sexuales a menores.

"Con efecto inmediato, he informado al cardenal Mahony de que no tendrá más responsabilidades administrativas o públicas", expresó en una carta el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, quien indicó también que el obispo auxiliar Thomas J. Curry, que trabajó junto a Mahony para ocultar los abusos a la policía, ha renunciado a su puesto en la iglesia de Santa Bárbara (California).

"Este material documenta abusos que ocurrieron décadas atrás. Pero eso no lo hace menos serio. Estos archivos suponen una lectura brutal y dolorosa. El comportamiento descrito en estos documentos



es terriblemente triste y malvado", afirmó Gómez en la misiva publicada por la Archidiócesis de Los Ángeles.

"No hay excusa alguna, no hay explicación para lo que les

ocurrió a estos niños. Los curas involucrados tenían el deber de ser sus padres espirituales y fracasaron. No puedo deshacer los errores del pasado que encontramos en estas páginas.



Leer estos documentos y reflejarme en las heridas que causaron ha sido la experiencia más triste que he tenido desde que soy arzobispo", manifestó Gómez.

El portavoz de un grupo de apoyo a las víctimas indicó que la decisión tomada por Gómez era necesaria desde hace tiempo pero que apenas supone un pequeño paso después de que su institución pasara años protegiendo a los implicados.

Pero la lista de inculpados sigue, y son muchos. El caso de los Legionarios de Cristo es otro de los que "clama al cielo". Víctimas y defensores de personas que sufrieron abusos sexuales de sacerdotes publicaron hace unos días una carta abierta para exigir que el cardenal Norberto Rivera Car-

rera, número uno de la iglesia católica

rios religiosos pederastas, incluido el fallecido Marcial Maciel, fundador de la congregación Legionarios de Cristo y acusado de abusos sexuales a menores, así como de mantener una doble vida con dos mujeres y varios hijos. Desde 1997, cuando los abusos de Maciel se destaparon en la prensa mexicana, Rivera Carrera "jamás se ha arrepentido públicamente de sus insultos hacia las víctimas ni, mucho menos, ha reconocido públicamente su responsabilidad como cómplice y protector de Marcial Maciel y de los sacerdotes pederastas", añade la carta.

Tampoco "ha pedido perdón público a las víctimas por todos los daños prolongados durante años", indica. La carta también acusa al cardenal de autorizar el traslado del sacerdote Nicolás Aguilar a Los Ángeles, California (EE.UU.), donde abusó de 26 menores, después de que violó a varios niños en Tehuacán, Puebla (centro). La misiva menciona el caso de Carlos López, quien abusó de varios acólitos en una iglesia del sur de la capital, un hecho que Rivera ignoró dejándolo seguir celebrando misas.

2008, a "renunciar a cualquier ministerio público" y "a retirarse a una vida de oración". Cosa que no había hecho su antecesor Juan Pablo II, a pesar de que ya se conocían los hechos.

Ahora comienzan a ver la luz documentos de estos Legionarios *gracias a nuevas órdenes judiciales*. Si bien no son sobre abusos sexuales, sí que ponen de manifiesto las prácticas cuestionables de la organización para recaudar fondos. Un juez de la Corte Suprema de Rodhe Island, Michael Silverstein, decía que estos documentos constituían una señal de alarma de cómo actuaban sus miembros, porque daban cuenta de los pasos que llevaron a que una anciana devota transfiriera millones de dólares a líderes religiosos que operaban en forma "dudosa" y en la "clandestinidad". Pero los documentos permanecieron en secreto hasta que The Associated Press, The New York Times, el National Catholic Reporter y The Providence Journal pidieron su divulgación, bajo el argumento de que eran de interés público.

Quizás cuando se publiquen estas líneas ya la Iglesia católica gozará de un nuevo líder. ¿Será más sensible al tema de los abusos —como parece que lo ha sido el papa ya emérito—? ¿Facilitará un mayor acceso a los archivos para hacer de la Iglesia una institución más transparente? Seguro que al leer esto más de uno ya sabe las respuestas. Siempre nos quedarán los jueces. Y vaya por delante la presunción de inocencia. Hablar de temas tan graves no debe hacernos perder nunca de vista esta presunción. Así que para acusar o exculpar de los hechos los archivos deberían ser siempre accesibles, en la medida que establece la ley. Y si esto no se pone en práctica, esperemos que siga habiendo jueces sensibles que, apoyados en la ley, los abran para el bien de las víctimas. ■

en México, se abstenga de participar en el cónclave para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Señalan que el cardenal Rivera Carrera encubrió a va-

Una de las decisiones más significativas de Benedicto XVI durante su papado fue la de obligar en mayo de 2006 a Marcial Maciel, fallecido en

